



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO  
Secretaria Jurisdiccional N° 2  
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia*  
*Corrientes*



EXP 146305/17

En la ciudad de Corrientes, a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil veinte, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente N° EXP 146305/17, caratulado: "**CASINOS DEL LITORAL SA C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES S/ AMPARO (CONTENCIOSO)**". Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan.

**EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA**

**SE PLANTEA LA SIGUIENTE:**

**CUESTION**

**¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?**

**A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ,** dice:

I. Contra la Sentencia N° 246 dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral (fs. 323/336 vta.) que al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de la ciudad de

Corrientes revocó la sentencia apelada, imponiendo las costas a la parte actora vencida; ésta última dedujo a fs. 341/354 el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley venido a consideración de este Superior Tribunal.

II. Para así decidir, la Cámara por mayoría de sus integrantes sostuvo que conforme el criterio del Superior Tribunal de Justicia fijado en los autos: “Casinos del Litoral S.A. c/ Municipalidad de la ciudad de Corrientes s/ Recurso Facultativo”, Sent. N° 53/2014, el acierto o error, el mérito o conveniencia de las soluciones legislativas, incluidas las ordenanzas municipales, no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición contenida en la ordenanza tarifaria requiere que la repugnancia de ésta con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. Y siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que el control judicial en materia tributaria no es ilimitado, ya que sólo puede ejercerse cuando las contribuciones son confiscatorias, sin que pueda juzgarse la equidad de las mismas ni su oportunidad o conveniencia.

Señaló además que no vislumbra que el adicional por la actividad por la cual debe tributar resulte irrazonable o violatorio de la relación de medio a fin que resulta indispensable para asignarle razonabilidad a la disposición legal en cuestión, pues el municipio en el ejercicio de sus potestades tributarias puede válidamente seleccionar los medios que considere más convenientes para su percepción.

III. Los agravios del recurrente pueden sintetizarse del siguiente modo: (i) la sentencia incurre en arbitrariedad al no encuadrar el tema adecuadamente; (ii) omite el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del aumento alicuotario dis-



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO  
Secretaria Jurisdiccional N° 2  
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia*  
*Corrientes*

-2-

Expte. N° EXP 146305/17

puesto para la actividad de los casinos durante el período fiscal 2017; (iii) erróneo tratamiento del tributo adicional toda vez que los fundamentos del voto mayoritario constituyen meras citas del fallo del STJ en otra causa, que difiere sustancialmente de la presente; (iv) la sentencia viola la normativa y jurisprudencia aplicables en la materia para la creación y cobro de las tasas municipales; (v) el aumento alicuotario establecido para la actividad de los casinos en el período fiscal 2017 (20 por mil) sin mediar razones claras ni probadas que aconsejen su incremento hacen que pierda razonabilidad y proporción entre el costo que demanda la prestación del servicio público divisible con el *quantum* individual que debería ingresar su parte; (vi) ello quedó evidenciado cuando el propio municipio meses más tarde dejó sin efecto el incremento de la alícuota retrotrayendo la tasa al 15 por mil con la sanción de la ordenanza tarifaria 6586/17; (vii) finalmente reitera la invalidez constitucional del art. 19 de la ordenanza tarifaria 6526/16, en tanto el “adicional” allí previsto no responde a un servicio concreto prestado por la municipalidad vulnerando de ese modo el principio de legalidad con jerarquía constitucional, conforme el cual toda carga tributaria debe ser establecida por la ley con todos los elementos esenciales de la obligación tributaria.

IV. El recurso extraordinario fue interpuesto en el plazo que estatuye el art. 278 del CPCC, y cuenta con los recaudos técnicos necesarios para la apertura de la instancia extraordinaria. Paso en consecuencia a pronunciarme sobre su mérito o demérito.

V. En ese quehacer, y para una mejor comprensión de la

solución que habré de propiciar, estimo conducente realizar una breve reseña de las constancias salientes de la causa.

a) La Sociedad Anónima Casinos del Litoral promueve acción de amparo contra la Municipalidad de la ciudad de Corrientes con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 16, ap. 8, de la Ordenanza Tarifaria 6526/16 en cuanto incrementó desproporcionada e irrazonable la Tasa por Registro, Contralor, Inspección, Seguridad e Higiene, del 15 al 20 por mil, sin que exista ninguna proporción con los servicios que recibe de parte del Municipio demandado. Pide también que se declare la inconstitucionalidad del art. 19 y de su Anexo II, por imponer de forma arbitraria e ilegal la obligación de abonar una “adicional” sin que dicha exigencia tributaria se vincule a un servicio efectivamente prestado por la municipalidad o alguna otra actividad estatal similar que le reporte algún beneficio que le sirva de causa.

b) La Municipalidad de Corrientes al evacuar el informe de ley pide el rechazo de la acción de amparo. Primero por considerar que no es la vía idónea para debatir esta cuestión. Segundo porque entiende que en la actualidad la mayoría de los municipios tienen en cuenta para fijar la alícuota por la tasa de registro, contralor, inspección, seguridad e higiene la “capacidad contributiva” del sujeto pasivo de la obligación tributaria. El hecho imponible radica en la prestación del servicio municipal de inspección, contralor y registro de comercios e industrias. Además la actividad o servicio municipal que se presta por la tasa municipal analizada tiene como hecho imponible los servicios de inspección, contralor y registro que actualmente presta la municipalidad destinado a preservar la seguridad, salubridad, higiene, entre otros, de los locales que desarrollan actividades sujetas al poder de policía municipal, tal como se en-



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO  
Secretaria Jurisdiccional N° 2  
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia  
Corrientes*

-3-

Expte. N° EXP 146305/17

cuenta establecido en el art. 150 del Código Fiscal Municipal.

c) La jueza de primer grado hace lugar parcialmente a la acción de amparo y en mérito a ello declara la inconstitucionalidad del art. 16, ap. 8 y del art. 19 de la ordenanza tarifaria 6526/16; y del vocablo “mensual” que establece el art. 16, ap. 7 y de todo el art. 19 de la ordenanza tarifaria 6586/17; ordenándole al municipio demandado aplicar el art. 16, ap. 7 de la ordenanza 6586/17 en forma bimestral según el artículo pertinente de la ordenanza 6371/15. En esa decisión, la sentenciante analiza el art. 16, ap. 8 de la ordenanza 6526/17 comparándolo con la ordenanza tarifaria 6371/15 que rigió el año anterior, observando la existencia de una diferencia -a su juicio- ilegal, arbitraria, irrazonable y carente de justificación, habida cuenta que anteriormente la alícuota era fijada en forma bimestral y en el 15 por mil, mientras que en la cuestionada se establece con carácter mensual y se sube al 20 por mil, no surgiendo qué cálculo matemático u operación habría realizado el municipio para gravar un mismo servicio de inspección de control e higiene siendo el mismo servicio. Refiere también que el art. 19 fija un monto adicional al Casino, en forma mensual, que no tiene las características de tasa porque no presta servicio alguno sino que aparece como un impuesto a los ingresos brutos, violentando el art. 9, inc. b) de la ley 23.548, reputándolos inconstitucionales.

d) Apelada esa decisión por el municipio demandado, la Cámara por mayoría de sus integrantes la revocó, lo que motivó la interposición por parte de Casinos del Litoral del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio.

VII. Sintetizados así los aspectos relevantes de la causa,

corresponde señalar liminarmente que, conforme la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaración de inconstitucionalidad, al importar el desconocimiento de los efectos de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos: 14:425; 147:286). Además, cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución (Fallos: 300:1029; 305:1304).

La revisión judicial en juego, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, sólo es practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe llegarse a una declaración de inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta necesidad (CSJN, “Rodríguez Pereyra”; publicado en La Ley 30/11/2012).

En este sentido, a partir de “Rivademar” fallado también por el Máximo Tribunal de la Nación (LA LEY 1989-C, p. 49), las ordenanzas revisten esa naturaleza, y no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad, en el caso concreto, de una disposición contenida en la ordenanza tarifaria requiere que la repugnancia de esta con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos 314:424; 320:1166). Y como también lo ha destacado la Corte Federal, el control judicial en materia tributaria no es ilimitado, ya que solo puede ejercerse cuando las contribuciones son confiscatorias, sin que pueda juzgarse la equidad de la misma ni su oportunidad o conveniencia (Fallos:



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO  
Secretaria Jurisdiccional N° 2  
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia  
Corrientes*

-4-

Expte. N° EXP 146305/17

188:105).

Tampoco puede soslayarse que la firma actora es “una empresa concesionaria monopólica de la actividad de explotación de juegos de azar por delegación del Estado Provincial”, por lo que, comercializa y se beneficia con el juego, siendo lógico que como contrapartida, deba cumplir con las exigencias que le imponen las autoridades municipales, quienes deben ejercer un control diligente y razonable en materia de contralor, salubridad, seguridad e higiene, asistencia social, desarrollo de la economía, conservación y control del medio ambiente tendiente a hacerle cumplir las reglamentaciones vigentes.

Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “[...] es legítimo que contribuya con el pago de las tasas al desarrollo del lugar en donde se instalan los casinos. De todo lo expuesto surge que el instrumento legislado a través de la norma impugnada no configura sino uno más de aquéllos utilizados por el legislador para asegurar la efectividad de la recaudación impositiva. Y no es de resorte del Poder Judicial el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones.” (Fallos: 306:655).

Por último, cabe recordar que no existe norma constitucional o legal que obligue, como pretende la actora, a que las tasas exhiban proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, habida cuenta que con lo que se percibe a través de ellas no deben atenderse únicamente los gastos de la oficina que presta el servicio, puesto que, tanto la existencia de esa oficina en particular como

el cumplimiento de sus fines dependen de toda la organización municipal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política financiera municipal y la declaración requerida en autos importaría un claro avance del Poder Judicial en la zona de reserva del H. Concejo Deliberante en el caso, no advirtiéndose tampoco la manifiesta irrazonabilidad, arbitrariedad ni afectación de derecho constitucional alguno en perjuicio de la actora.

En base a los fundamentos expuestos, y si el presente es compartido por la mayoría necesaria de mis pares, corresponderá rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas al recurrente vencido, conforme al principio general establecido en el art. 68 del CPCC, con pérdida del depósito económico. Regular los honorarios profesionales del abogado de la parte recurrente, doctor Lucas Alfredo Gutiérrez, en el 30% de lo que se determine para el vencido en primera instancia. Y fijar los correspondientes al abogado de la Municipalidad de Corrientes, doctor Juan Carlos Baldomero Pérez, en el 30% de lo que se establezca para el vencedor en primera instancia. Ambos en la condición de monotributistas frente al IVA (arts. 9 y 14, ley 5.822).

Y siguiendo con el temperamento adoptado por este STJ, una vez firme el rechazo de la presente acción, de conformidad con lo dispuesto por el art. 238 inc. i) del Código Fiscal, deberá practicarse por la Secretaría del juzgado de origen la planilla de tasas judiciales adeudadas. Así voto.-

**A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO**

**DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN**, dice:





Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO  
Secretaria Jurisdiccional N° 2  
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia  
Corrientes*

-5-

Expte. N° EXP 146305/17

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos.

**A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO**

**DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI**, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos.

**A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO**

**DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ**, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos.

**A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO**

**DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN**, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

**SENTENCIA N° 76**

1°) Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas al recurrente vencido, conforme al principio general establecido en el art. 68 del CPCC. 2°) Regular los honorarios profesionales del abogado de la parte recurrente, doctor Lucas Alfredo Gutiérrez, en el 30% de lo que se determine para el vencido en

primera instancia. Y fijar los correspondientes al abogado de la Municipalidad de Corrientes, doctor Juan Carlos Baldomero Pérez, en el 30% de lo que se establezca para el vencedor en primera instancia. Ambos en la condición de monotributistas frente al IVA (arts. 9 y 14, ley 5.822). 3º) Una vez firme el rechazo de la presente acción, de conformidad con lo dispuesto por el art. 238 inc. i) del Código Fiscal, deberá practicarse por la Secretaría del juzgado de origen la planilla de tasas judiciales adeudadas. 4º) Insértese y notifíquese.

**Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ**  
**Presidente**  
**Superior Tribunal de Justicia Corrientes**

**Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN**  
**Ministro**  
**Superior Tribunal de Justicia Corrientes**

**Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI**  
**Ministro**  
**Superior Tribunal de Justicia Corrientes**

**Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ**  
**Ministro**  
**Superior Tribunal de Justicia Corrientes**

**Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN**  
**Ministro**  
**Superior Tribunal de Justicia Corrientes**

**Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO**  
**Secretaria Jurisdiccional N° 2**  
**Superior Tribunal de Justicia Corrientes**